PRISAS, CONFUSIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN

Luis B. Guerrero Figueroa
Congresista de la República

La demora en la aprobación de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales ha puesto nuevamente sobre el tapete la concepción del proceso de descentralización, apreciándose dentro de sus críticos cierta consistencia en sus observaciones, como en el caso del diario El Comercio respecto de la celeridad del proceso, la confusión y la falta de perspectiva por parte del partido de gobierno al intentar postergar las elecciones regionales por apresuramiento. En ambos casos es importante recordar por qué impulsamos un proceso de tanta trascendencia para nuestro país.

Desde el lado político, esta es una de las promesas electorales de las elecciones presidenciales del año 2001, donde se especificó el calendario para las elecciones regionales. Al concretar esta promesa electoral se buscó recuperar la confianza y credibilidad de la ciudadanía ante el compromiso de sus políticos.

De otro lado, el proceso adquiere legitimidad al haberse aprobado por unanimidad las modificaciones constitucionales, electorales y legislativas durante la legislatura pasada, llamando poderosamente la atención que se haya evaluado la postergación de las elecciones regionales, decisión que expresa un desconocimiento del contexto en el que se ha venido enmarcando este proceso.

Lo dicho puede explicarse considerado un debate que nunca se esclareció adecuadamente por falta de comprensión o por la turbulencia política existente hacia fines de la década de los noventa, relacionado con los beneficios de las reformas efectuadas en ese período dado que ellas sólo se manifestaban en el nivel macroeconómico y no en el nivel microeconómico, siendo por ende expresión del agotamiento de un modelo que si bien atrajo inversiones estas no han favorecido a las mayorías.

La percepción de los beneficios inequitativos de una economía social de mercado es el resultado de una estrategia que privilegió un sistema institucional orientado a mercados altamente organizados que se adaptaron con facilidad a parámetros competitivos internacionales, los mismos que se encuentran en las principales ciudades de nuestro país. Sin embargo, la heterogeneidad de nuestros mercados internos en cuanto a su desarrollo no facilitó el encadenamiento de actividades que demandan recursos calificados, circuitos comerciales desarrollados, infraestructura básica, etc..

De hecho la anterior estructura de gobierno fomentó el hipercentralismo, pues no le convenía iniciar un proceso de descentralización del Estado en tanto significaba acceso a la información, transferencia de decisiones políticas, concertación en la toma de decisiones, participación ciudadana, planeamiento en la orientación de las inversiones, rendición de cuentas y transparencia pública.

Parte de esas reformas se iniciaron con el gobierno de transición, como las de acceso a la información e implementación de un sistema electoral por distrito múltiple. Pero recién durante el gobierno de Alejandro Toledo se incorporó mejores herramientas mediante modificaciones constitucionales, electorales, legislativas y presupuestarias, las cuales se han efectuado a partir de un consenso político y con una importante participación ciudadana.

En el plano internacional enfrentamos un escenario recesivo, de ajustes institucionales, no proclive a mostrar la abundancia de capitales dada hacia mediados de los noventas, exigiendo por consiguiente consistencia en las políticas nacionales. En el nivel nacional, las nuevas autoridades regionales y locales serán determinantes en la captación de los capitales necesarios para el desarrollo de sus regiones, debiendo contar para ello con instrumentos para mantener coherencia con los lineamientos nacionales y subnacionales.

El diseño institucional descentralista se corresponde con el agotamiento de un modelo que no privilegió a las mayorías y a un escenario internacional volátil, donde incluso la política monetaria pierde efectividad dentro del instrumental de la política económica, de modo que es ahora la política fiscal la principal herramienta para desarrollar estrategias cíclicas y anticíclicas, siendo para ello axial la coordinación intergubernamental a través de la especialización de los diferentes niveles de gobierno, siendo pues labor de los entes regionales el incentivo a las inversiones.

Obviamente todo lo dicho no significa desconocer el *know-how* existente en el aparato público como Pro inversión, sino que contrariamente se pretende convergencias en ese objetivo nacional. En suma, el modelo descentralista no requiere su implementación apresurada ni confusa, y entraña la concepción de que la creación de riqueza no se determina únicamente con el énfasis en los mercados sino también con la acción de una sociedad que percibe y participa de los beneficios promovidos por un estado que emplea eficientemente el gasto público y promueve la competitividad.